

CATALUÑA

Los centros especiales de empleo contratan cada vez más a personas con minusvalías leves, lo que resta oportunidades a quienes requieren más atención

“Mi discapacidad me sacó del paro”

STEFANIA GOZZER, Barcelona

Dani nunca pensó que el accidente laboral que le dejó la rodilla dañada y un grado de discapacidad del 55% le sacaría de las listas del paro dos décadas después. Tras cinco años sin empleo, ya superaba los 40, había agotado los subsidios y recurría a sus padres para pagar los 700 euros de hipoteca y mantener a sus tres hijos. Hasta que un amigo le recomendó probar suerte en un centro especial de empleo (CET), cuya plantilla debe estar formada al menos en un 70% por personas con alguna minusvalía: “Casi no se te nota la discapacidad. Te cogerán fácilmente”.

Los discapacitados con graves dificultades han pasado de representar en 2010 el 71% de la fuerza laboral de los CET al 57,2% en 2014, según datos del Departamento de Empresa. Estos centros se crearon para ofrecer empleo subvencionado y con apoyo de profesionales a aquellos a los que el sector ordinario rechazaba. Pero, desde hace algunos años, el perfil más contratado es el de personas con minusvalías leves que hasta antes de la crisis nunca tuvieron problemas para hallar trabajo. Gente que recurre a estos centros, donde los salarios son muy bajos, hartos de no encontrar nada mejor.

Fuentes del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona aseguran que esta práctica ha aumentado: “El mercado ha expulsado a mucha gente mayor de 40 años, que se ha sacado el certificado de discapacidad. No se están



Dani, contratado por un centro especial de empleo, en un parque de Barcelona. / ALBERT GARCIA

utilizando los CET como herramientas de integración, sino para conseguir bajos costes”. A diferencia de los centros laborales ordinarios, los especiales no pagan la cuota empresarial de la Seguridad Social. En Cataluña, además, 195 de un total de 209 reciben subvenciones que cubren parte de los sueldos de 13.504 trabajadores. El año pasado, las ayudas ascendieron a poco más de 68 millones de euros.

La Mesa del Tercer Sector denunció hace dos años en un informe que “el acceso a ayudas públicas ha generado una visión de

oportunidad de negocio” en el que “la acreditación de discapacidad” se ve “como un valor de acceso a incentivos”. Pero como emplear a este colectivo no es sencillo y, a veces, no resulta rentable, “contratan personas con discapacidades leves que podrían trabajar en el mercado ordinario”. Así resultan “muy competitivos” respecto a los CET sin ánimo de lucro “porque gozan de las mismas ayudas y tienen trabajadores con una productividad más alta” que no necesitan monitores. Las entidades exigieron que se pueda desacreditar a quienes “abusen”

del marco normativo.

“Todo es legal, no se saltan ninguna ley”, recuerda el responsable de CET de CC OO, Joan Martínez. Para beneficiarse de las ayudas que se dan por trabajador, la única exigencia es que este tenga una minusvalía igual o superior al 33%, sin especificar qué dificultades le acarree en el entorno laboral. “Antes, eran centros en los que chicos con discapacidad psíquica hacían bolis y montaban piezas. Ahora que se han abierto a prestar servicios, buscan personas que den valor añadido”, explica. Como Dani, cuya discapacidad

solo se notaba en una leve cojera. O su ex compañero de trabajo, Tito, que tenía una acreditación del 33% a causa de una inteligencia límite que durante la burbuja inmobiliaria nunca le impidió encontrar faena en la construcción.

El gerente de la Federación de Centros Especiales de Cataluña (Fecet), Miquel Vidal, admite que algunos centros se han convertido en “formas de financiar estructuras para pagar el salario de los técnicos”. Pero cree que esto es minoritario en Cataluña y que la mayoría cumple con la máxima de “buscar el trabajo adecuado para la persona y no al revés”.

Oportunidades

El presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conace), Albert Campabadal, duda de si es reproachable la contratación de personas que pueden competir en el mercado ordinario: “Si no están encontrando trabajo, pero van a un CET y allí se lo dan, no sé si hay que criticarlo o lo contrario”. El presidente de Dincat, Ramon Vives, recuerda que esta práctica resta oportunidades a los discapacitados con graves dificultades de inserción: “Está dentro de la ley, pero no tiene legitimidad, desvirtúa la misión de los CET”.

Dani, a quien el TEB Sant Andreu no le renovó el contrato después de que se rompiera los meniscos trabajando, reflexiona: “No encontré estabilidad en el CET, pero me dejó comer. Lo pasé mal porque hacía lo mismo que otros operarios pero ganaba menos por ser discapacitado. Pero es diferente cobrar 750 euros a fin de mes a no cobrar nada”. Por eso ni él ni Tito, que antes trabajaba en Xarxa Ambiental, quieren hacer públicos sus verdaderos nombres. Porque pese a estar convencidos de que algunos CET “se aprovechan de los discapacitados”, sospechan que el paro les empujará a tocar sus puertas otra vez.

La victoria de BComú reaviva los interrogantes de 1979

VIENE DE LA PÁGINA 1

Es el caso de Llum Ventura, Eva Alfama, Huma Jamshed, y Albert Sancho (Ciutat Vella) o Carolina Recio, Toni Tallada o Manuel Cubero (Nou Barris). Y en el Ayuntamiento todavía hay cuadros medios por nombrar: es decir, activistas que se lo están pasando bien. En medio de la diáspora hay organizaciones que han blindado sus mejores activos.

El veterano activista vecinal y codirector de Carrer, Andrés Naya, admite que la entrada de los movimientos sociales en el Ayuntamiento reaviva los interrogantes que se plantearon tras las municipales de 1979: “Se cuestionó si las asociaciones de vecinos eran necesarias, ahora surge el discurso de si la institución es lo mismo que los movimientos”. Naya entiende que “ahora hay sintonía en términos generales”. Pero advierte, y en eso coincide

con la nueva presidenta de la FAVB, Anna Menéndez: “desde el consistorio hay que concretar”. Los barrios, Meridiana, el Besòs, Glòries... querrán soluciones “y la expectativa es mayor, no podemos bajar la guardia”. Internamente, pasado el shock de la salida de Vidal y Rabell, la junta de la FAVB se reorganiza “para asumir más horizontalmente unas cargas de trabajo de compañeros que hacían mucho trabajo”.

Desánimo en la PAH

En la PAH hubo un “momento de caos y desánimo tras la marcha de Colau y la gente que tenía un gran peso”, admite su actual portavoz, Carlos Macías, pese “al esfuerzo por hacer un buen traspaso y el paso adelante” que dieron activistas como él. Además, él fue de los que quisieron quedarse en la calle. “Nos tene-

mos que quedar, cuidar el apartidismo y hacer más presión que nunca, porque si el Ayuntamiento quiere cambiar las cosas, también la tendrá por otro lado”, conviene. Desde la Plataforma por la Auditoría de la Deuda, Iolanda Frenillo admite las consecuencias de la fuga: “Claramente nos resta capacidad, por la gente que ha entrado en la institución y la que se incorpora a los nuevos espacios políticos”. “Es una situación que nos descoloca y nos obliga a recolocarnos ante un actor muy distinto. Ahora hay más Ayuntamientos que quieren auditorías y nosotros tenemos menos gente”. Una paradoja. A largo plazo, Frenillo plantea el reto de “encontrar estrategias ante la nueva situación: darle la vuelta y aprovechar para incidir sobre quienes tienen capacidad de decidir”.

El Observatorio de la Deuda



Gemma Tarafa.

en la Globalización ha topado con otro aspecto: “el foco de transformación ha pasado de las esferas internacionales a la local”, dice Alfons Pérez, que reconoce “el impacto del flujo de gente y energía que salió desde la gestación de la candidatura BComú”. “Hemos perdido efectivos en escalas no municipales”, admite y aunque asegura que podrán “resituarse el discurso y que hay esperanza, el ámbito local tiene limitaciones”. “Nuestra fortaleza es que nos necesitan para hacer estudios independientes”,

concluye. En el Observatorio Desc, su nueva directora, Irene Escorihuela apunta que las salidas de miembros de la junta y el equipo técnico “fueron progresivas”, lo que facilitó el relevo. Tienen en mente “resituarse y tejer nuevas alianzas” y celebran “la presencia de activos potentes en el Ayuntamiento”.

Selección pública

El experto en movimientos sociales de la UPF Jordi Mir señala que “si se ha conseguido lo que parecía impensable”, que una candidatura ciudadana gobierne en Barcelona, “y hay una generación de activistas muy preparados en sus áreas, es lógico que quieran hacer el paso”. “Es un capital valioso que se marcha, pero a diferencia de 1979 ahora saben que haber ganado no significa que hayan conseguido sus objetivos. Tienen mucha responsabilidad: mucha gente que les ha confiado más que un voto”. Mir reflexiona y abre otro debate: “Sin cuestionar los perfileros, si se trata de hacer la revolución, ¿no deberíamos plantearnos los procesos de selección fueran más públicos?”.